

# LA ETNOGRAFÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMO ARTE MARCIAL: ANÁLISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR CONTRA LA CORRIENTE<sup>1</sup>

Policy Ethnography as a Combat Sport: Analyzing the Welfare State Against the Grain

VINCENT DUBOIS\*

Fecha de recepción: 10 de enero de 2024 – Fecha de aprobación: 15 de marzo de 2024

## Resumen:

Burawoy distingue entre sociología política, sociología profesional y sociología pública. Basándome en mi propia experiencia investigadora en etnografía crítica para analizar organizaciones y políticas de asistencia social, muestro que estos tres tipos no se contradicen necesariamente entre sí. En una estrategia que se hace eco de la noción de “arte marcial” de Bourdieu, propongo considerarlos más bien como tres etapas posibles. En primer lugar, la investigación por encargo permite acceder al terreno y a los datos. Siempre que el investigador preserve su autonomía, esta etapa provisional resulta necesaria para construir un conocimiento académico innovador sobre las formas concretas de las políticas públicas. Después, este uso científico autónomo de la información de primera mano, interna y detallada permite al investigador difundir un conocimiento crítico fuera del ámbito académico. Como en un arte marcial, el investigador crítico puede utilizar la fuerza del socio-adversario (aquí los organismos públicos) para “luchar” contra él, es decir, para contribuir a la crítica pública de sus políticas.

**Palabras clave:** etnografía crítica de la política pública; investigación aplicada; investigación académica; asistencia social.

## Abstract:

Burawoy distinguishes between policy sociology, professional sociology, and public sociology. Based on my own research experience in critical ethnography to analyze welfare organizations and policies, I show that these three types do not necessarily contradict one another. In a strategy echoing Bourdieu’s notion of «martial art», I propose to consider them rather as three possible stages. First, commissioned research allows access to the field and data. Provided the researcher preserves his or her autonomy, this provisional stage proves necessary to build innovative academic knowledge on the concrete forms of public policies. Then, this autonomous scientific use of first-hand, internal, and detailed information enables the researcher to disseminate critical knowledge outside the academia. As in a martial art, the critical researcher can use the strength of the partner-adversary (here public bodies) to «fight» him, that is, to contribute to the public critique of its policies.

**Keywords:** critical public policy ethnography; applied research; academic research; welfare.

\* Dr. en Ciencias Políticas. Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Estrasburgo, Francia. ORCID: 0000-0003-2892-5120. Correo-e: vincent.dubois@misha.fr

## Introducción.

“Es nuestra biblia”. Así describió el subdirector de investigación de un importante organismo nacional francés de asistencia social un libro que yo había publicado sobre los encuentros entre las oficinas de asistencia social y sus clientes. Una frase tan entusiasta me sorprendió. La investigación de la que surgió mi libro había sido encargada por esta organización, pero el informe había permanecido en un estante durante mucho tiempo antes de llamar la atención de mis socios institucionales. Mi etnografía de las interacciones cara a cara entre los burócratas a nivel de calle que se sientan detrás de los escritorios y los beneficiarios de la asistencia social, procedentes de los sectores más precarios de las clases trabajadoras, con los que se encuentran habitualmente, hacía hincapié en las relaciones de poder desde una perspectiva crítica y nunca pretendió dar consejos sobre cómo mejorar la gestión de las relaciones con los “clientes”, como se les suele llamar en el lenguaje de las instituciones. Tal orientación fue poco propicia para que mi libro se convirtiera en una referencia oficial que, aunque no siempre consultada, parecía ampliamente reconocida por los gestores políticos (“una biblia”). Su largo y tortuoso camino hacia la canonización se vio favorecido por el reconocimiento académico y, en menor medida, por la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, gracias a este reconocimiento institucional tardío, pude acceder a más información, disfruté de bastante libertad a la hora de elegir temas de investigación (incluso controvertidos) y definir mi marco de trabajo, y obtuve apoyo para otras investigaciones que llevé a cabo en colaboración con la organización asistencial en cuestión.

Esta experiencia personal me brinda la ocasión de reflexionar sobre la relación entre etnografía y políticas públicas y, más concretamente, sobre cómo garantizar unas condiciones favorables para la investigación etnográfica crítica autónoma cuando se trata de políticas públicas. A la luz de esta oportunidad, abordo las cuestiones de cómo se recibe este cuerpo de conocimiento y por quién, teniendo en cuenta que el público de la etnografía política no se limita a los formuladores de políticas (*policymakers*). Al establecer un vínculo entre las condiciones de producción y las condiciones de recepción de mi trabajo por parte de diversos públicos, exploro cómo la etnografía política puede llegar a ser pública con el objetivo de contribuir a los debates en curso sobre la etnografía pública más allá del ámbito específico de la política.

De hecho, la relación entre la elaboración de políticas y la investigación etnográfica plantea numerosas cuestiones en el centro de los debates sobre etnografía pública (Tedlock, 2005; Fassin, 2013). Por citar solo algunas: ¿A quién va dirigida la investigación etnográfica? ¿Cuáles pueden ser sus resultados en el mundo real? ¿Cuáles son, a su vez, los posibles efectos de las expectativas externas en el diseño de la investigación? ¿Cómo definen los etnógrafos su papel y combinan las razones académicas con otras posibles agendas? Estas diversas cuestiones no son específicas del campo de las políticas públicas, pero dado que el etnógrafo se enfrenta a ellas de manera directa, concomitante y profunda, probablemente más en este campo que en otros, ofrece una buena oportunidad para abordarlas.

## ¿Qué tipo de conocimiento es la etnografía de las políticas públicas?

Para reflexionar sobre las condiciones sociales y metodológicas de la etnografía de las políticas públicas, partiré de las propuestas realizadas por Michael Burawoy en el ámbito de la sociología, pero que considero extensibles a las demás ciencias sociales. Por otra parte, reflexionar sobre lo que tienen en común las distintas disciplinas refleja mi concepción de una ciencia social unificada<sup>2</sup>. La sociología política es uno de los cuatro tipos de conocimiento sociológico identificados por Burawoy, siendo los otros la sociología profesional, crítica y pública (Burawoy, 2005). Aquí, la ciencia social está “al servicio de un objetivo definido por un cliente” y su “razón de ser es proporcionar soluciones a los problemas que se nos presentan o legitimar las soluciones que ya se han alcanzado” (Burawoy, 2005, p. 9). Desde esta perspectiva, la investigación sobre políticas es un “conocimiento instrumental” (en contraposición al conocimiento reflexivo) destinado a un público no académico.

Esta definición analítica establece claramente la frontera entre el conocimiento orientado a las políticas y sus destinatarios, y otros tipos de conocimiento con sus respectivos destinatarios. Sin embargo, esta distinción no es tan clara como podría parecer, ya que corre el riesgo de suponer que la sociología de las políticas públicas es equivalente a la investigación para estas políticas, es decir, un conocimiento experto supuestamente útil para los responsables políticos y, por el contrario, de menor valor según los estándares académicos. No cabe duda de que esta ecuación es pertinente para explicar gran parte de la sociología de las políticas cuando se define como investigación aplicada

que proporciona información y asesoramiento a los responsables políticos. Sin embargo, existe otra forma de definir la sociología de las políticas públicas, esta vez como la sociología o etnografía de los procesos de las políticas públicas. Según esta definición alternativa, mucho menos común, los científicos sociales no proporcionan respuestas a las preguntas planteadas por los agentes de la política pública. En su lugar, formulan sus propios problemas y preguntas, construyen la política como objeto de investigación y utilizan los marcos y métodos empleados por sus homólogos científicos para estudiar otros objetos. Esta redefinición ha sido defendida e ilustrada en varias ramas de las ciencias sociales, en la antropología (Shore & Wright, 1997; Shore et al., 2011; Wedel et al., 2005; Balbi & Boivin, 2008) y bajo el estandarte de los estudios críticos sobre políticas (Orsini & Smith, 2011). Según esta nueva definición, la etnografía de las políticas públicas es, por tanto, “profesional” (académica) y quizá también “crítica”, como mostraré más adelante. Pero atenerse estrictamente a esta concepción y no cruzar nunca la línea que la distingue de la investigación orientada a las políticas no es tarea fácil. Estas dificultades están en el centro de la reflexión que desarrollaré en este artículo.

Estas observaciones introductorias me llevan al punto principal: es posible reconsiderar algunas oposiciones comunes como “aplicada” frente a “crítica”, o “*policy-oriented*” frente a “académica”, así como las distinciones entre categorías de receptores de la investigación pública (políticos y administrativos, el público en general o el ámbito académico). Estas oposiciones son plenamente pertinentes a nivel analítico y general, pero no son categorías establecidas de forma permanente y mutuamente excluyentes. Designan

tensiones y polaridades más que oposiciones rígidas, ya que las líneas difusas son mucho más habituales en las prácticas concretas de los científicos sociales que las distinciones tajantes. Además, es posible reinterpretar la tipología de Burawoy de forma dinámica y considerar que sus cuatro tipos describen etapas sucesivas de una carrera o un proceso de investigación y no opciones finales<sup>3</sup>.

Así es como poco a poco fui definiendo una estrategia no planificada, pero no por ello menos consciente, en mi investigación en general y en la etnografía de las políticas públicas en particular. Esta estrategia se basa en dos principios fundamentales: en primer lugar, la adopción de una actitud intransigente con respecto a la autonomía de la investigación (por ejemplo, negarse a abordar las cuestiones en la forma en que las definen los responsables políticos o a redactar recomendaciones políticas); en segundo lugar, el uso de métodos etnográficos, entre otros, tanto en oposición a los enfoques dominantes del análisis de políticas como a modo de cuestionamiento de los puntos de vista oficiales sobre cuestiones del ámbito político (Dubois, 2014a). Todo esto se ajusta a los modelos de sociología “profesional” y “crítica” de Burawoy.

Sin embargo, la consecución de estos modelos puede exigir, paradójicamente, hacer concesiones, cuando no adoptar parcial y temporalmente ciertos rasgos contradictorios del “saber político”. El problema del acceso al terreno, por supuesto crucial para la etnografía en particular, plantea un desafío a la aplicación directa y rígida de estos principios. A diferencia de otros campos, suele ser muy difícil, si no imposible, realizar un trabajo de campo etnográfico adecuado sobre los procesos de las

políticas públicas sin el acceso concedido por los responsables políticos, que tienen su propia agenda, su propia noción (a menudo vaga) de las ciencias sociales y su propia concepción de cómo la investigación puede serles útil o, por el contrario, dañar la imagen pública de su institución. En consecuencia, las prácticas habituales del trabajo de campo etnográfico —abrir las puertas cerradas de la burocracia, acceder a los archivos, recopilar documentos internos, hablar con personas de distintos niveles jerárquicos— requieren un acuerdo negociado con las autoridades políticas y, por tanto, un compromiso entre lo que los investigadores quieren hacer y lo que los funcionarios desearían que hicieran o evitaran hacer.

Esto se suma a que la investigación por encargo es una de las principales posibilidades de dicho acuerdo. Dado que incluye un aspecto financiero, que posiblemente convierta a los agentes de la política pública en “clientes”, por utilizar el término de Burawoy, la investigación por encargo puede influir en la selección de los problemas a investigar, imponer un punto de vista oficial sobre ellos o definir la finalidad del estudio en términos de “gestión” más que científicos. En otras palabras, la pérdida de autonomía científica puede ser el precio del acceso al terreno necesario para llevar a cabo una investigación empírica. En la concepción de la etnografía de las políticas públicas que defiendo, este es un precio demasiado alto: no tiene sentido llevar a cabo una investigación empírica si no sigue criterios académicos estrictos o si no persigue objetivos científicos y críticos. El reto es, por tanto, superar las contradicciones que existen entre los objetivos de la etnografía crítica de las políticas públicas y las condiciones científicas, políticas y prácticas de su implementación.

Relataré la forma en que me enfrenté a estas dificultades en mi investigación sobre las políticas de asistencia social en Francia, en la que hice un uso extensivo (pero no exclusivo) de métodos etnográficos. La narración de esta experiencia personal, con sus éxitos y fracasos, pretende contribuir a un debate colectivo sobre cómo hacer posible una etnografía autónoma de las políticas públicas. Antes de llegar a este punto, sin embargo, es necesario esbozar el contexto académico, institucional y general de mi experiencia.

### **Etnografía pública en el contexto francés**

La división entre disciplinas académicas en las ciencias sociales francesas no es la misma que en otros países. Las disciplinas y subdisciplinas no están tan estrictamente separadas como en la mayoría de los países. Mi disciplina, por ejemplo, es la ciencia política, que en Francia es prácticamente sinónimo de sociología política y comparte marcos teóricos y métodos con la sociología. Existe una larga tradición de sociología cualitativa basada en entrevistas en profundidad y observaciones a largo plazo, que podría considerarse antropología o etnografía desde una perspectiva norteamericana, por ejemplo. En Francia, las referencias al trabajo de campo y a los métodos etnográficos se han popularizado entre otras disciplinas de las ciencias sociales en las dos últimas décadas. Uno de los libros de texto más utilizados para formar a estudiantes de ciencias sociales en la realización de trabajo de campo, escrito por dos sociólogos, es en realidad una guía de investigación etnográfica (Beaud & Weber, 2014), y hoy en día muchas tesis doctorales en sociología y ciencias políticas incluyen la etnografía en su metodología. Sin embargo, a pesar de su fuerza

como práctica de investigación, la antropología es bastante débil como disciplina académica. En los últimos años se han cerrado muchas licenciaturas y másteres y los etnólogos son mucho menos numerosos que sus colegas de otras disciplinas en las facultades universitarias. Por lo tanto, en el contexto francés, es sin duda más pertinente hablar de científicos sociales públicos (algunos de los cuales utilizan métodos etnográficos) que de etnógrafos públicos *per se*.

La ciencia social pública existe en la medida en que nos referimos a la presencia de científicos sociales fuera del mundo académico. Diariamente, periódicos nacionales como *Le Monde* y *Libération* publican debates sobre cuestiones sociales y políticas a cargo de sociólogos, historiadores o (con menor frecuencia) antropólogos. La creciente demanda de conocimientos especializados por parte de los medios de comunicación ha multiplicado el número de entrevistas con científicos sociales en las últimas décadas, lo que se ha convertido a su vez en un tema de debate dentro de la profesión (Castel, 2000; Lemieux et al., 2010). Como han demostrado Laurent Jeanpierre y Sébastien Mosbah-Natanson en su estudio sobre los científicos sociales publicado en *Le Monde*, su modelo dominante de intervención en el espacio público sigue estando influido por la definición histórica francesa de los intelectuales como “especialistas universales” (es decir, que hablan en nombre de valores universales), lejos de la definición competidora de “experto” en el sentido estricto del término (Jeanpierre & Mosbah-Natanson, 2008). En las dos últimas décadas, varias editoriales independientes han abierto un nuevo espacio para las publicaciones populares, en su mayoría elaboradas por académicos que utilizan los conocimientos de las ciencias

sociales para participar en debates públicos (Noël, 2012). Los volúmenes breves destinados a un público amplio se han convertido en un modelo establecido para las editoriales que publican series de libros que promueven orientaciones críticas, cuando no radicales<sup>4</sup>. Las editoriales más consolidadas han seguido este modelo, trabajando con autores reformistas más moderados<sup>5</sup>.

Por último, y este aspecto está más específicamente relacionado con el tema de este capítulo, en Francia existe una fuerte tradición de colaboración entre los científicos sociales y los organismos públicos, como los ministerios y las agencias nacionales (Bezès et al., 2005). La investigación aplicada y el modelo de conocimiento experto “útil” prevalecen en esta rica y compleja tradición. Sin embargo, siempre ha habido espacio (aunque ahora sea muy reducido) para la investigación autónoma, incluso en formas radicalmente críticas. Por ejemplo, en los años setenta, los análisis neomarxistas y foucaultianos del urbanismo y la asistencia social que denunciaban el poder del Estado capitalista o el control social punitivo sobre las poblaciones desfavorecidas fueron financiados por el Estado e influyeron en la formación de los funcionarios de estas áreas. Más recientemente, y más en sintonía con mi enfoque, el trabajo de campo publicado posteriormente en *La miseria del mundo* bajo la supervisión de Bourdieu fue financiado inicialmente por una organización financiera estatal, la Caisse des Dépôts et Consignations (Bourdieu, 2016). A pesar de su formato inusual (casi mil páginas, compuestas principalmente de entrevistas), el libro cosechó una considerable atención mucho más allá de los círculos académicos.

Hay ejemplos de investigaciones etnográficas financiadas por ministerios y organismos públicos, principalmente para recabar información sobre los modos de vida de grupos sociales concretos. Por ejemplo, el estudio de Pierre Bonte y Anne-Marie Brisebarre sobre el sacrificio de ‘Id al-kabir en los suburbios franceses fue financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales como parte de su programa de política de inmigración (Brisebarre, 1993). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, rara vez se pide a los etnógrafos que dirijan su atención a las organizaciones y procesos de las políticas públicas (Dubois, 2015). La tendencia neoliberal en la administración pública ha llevado a recortes en los presupuestos de investigación y a una preferencia por lo que C. Wright Mills llama —en un contexto completamente diferente— “empirismo burocrático”, es decir, métodos estandarizados destinados para el uso directo de los burócratas, como la administración aplicada, la economía o la sociología cuantitativa positivista (Mills, 2000). Lo menos que puedo decir es que ha habido contextos más favorables para que la investigación crítica autónoma colabore con las agencias políticas y, por tanto, para lo que yo llamo etnografía crítica de las políticas públicas (Dubois, 2012, 2015). Sin embargo, todavía hay oportunidades para ello.

Relataré tres de mis experiencias personales con la misma institución, que es uno de los principales organismos públicos franceses de asistencia social, vivienda y subsidios familiares, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (Caja Nacional de Subsidios Familiares). Como estas experiencias abarcan casi veinte años, esta narración dará cuenta de varios cambios en mi posición, la difusión de mi investigación y mi relación con la institución.

En el proceso ilustraré cómo los tipos de sociología de Burawoy se contradicen, pero también se combinan entre sí y, en última instancia, designan etapas en un proceso de investigación en lugar de opciones que se excluyen mutuamente de una vez por todas.

### **Traducir las preocupaciones de los gestores en etnografía crítica de las políticas públicas**

Mi primera investigación en etnografía de políticas públicas comenzó en 1995, cuando analicé las relaciones entre usuarios y empleados en las oficinas de asistencia social. Se trataba de un encargo que respondía a diversas preocupaciones organizativas, como mejorar la imagen de la agencia frente a sus usuarios, encontrar las razones detrás de las cada vez más largas colas de espera, explicar las actitudes de los ciudadanos pertenecientes a grupos desfavorecidos y desarrollar las habilidades interpersonales de los empleados públicos. La idea inicial era encontrar formas de mejorar la satisfacción de los usuarios y revisar la organización interna de la agencia en una perspectiva inspirada, al menos indirectamente, en la nueva gestión pública. La palabra de moda de la época era “modernización” de los servicios públicos, que en este caso significaba tanto el cuestionamiento de la actitud supuestamente “arcaica” de los burócratas hacia sus usuarios como la esperanza de que estos últimos contribuyeran por sí mismos a modernizar la organización burocrática expresando sus deseos mediante la adopción de una actitud más activa en lugar de ser objeto del poder burocrático y convirtiéndose en coproductores de los servicios públicos.

En un principio, esta agenda no parecía interesarme como investigador. En aquel momento, acababa de defender mi tesis doctoral sobre un tema completamente distinto, pero estaba buscando trabajo y no estaba en condiciones de rechazar una oportunidad laboral. Sin embargo, rápidamente pude plasmar estas preocupaciones institucionales en un proyecto completamente distinto. En primer lugar, el programa de investigación estaba bajo la supervisión de dos colegas conocidos por su firme apoyo a la independencia de los científicos sociales y su negativa a comprometerse con la investigación estrictamente aplicada o de gestión. En segundo lugar, los directores de investigación con los que traté en la agencia de asistencia social se convirtieron en valiosos aliados. Estaban dispuestos a convencer a sus superiores del valor de la investigación independiente en lugar de imponer a los investigadores una agenda orientada a la práctica. Al estar al tanto de las nuevas tendencias de investigación en las ciencias sociales, concibieron originalmente el proyecto de investigación con referencia al marco sociológico recién construido por Luc Boltanski y Laurent Thévenot (Boltanski y Thévenot, 1991). A diferencia de la sociología crítica de Bourdieu, estos autores abogaban por una “sociología de la crítica” adoptando el punto de vista de las personas que actúan en el mundo social para comprender las operaciones críticas emprendidas por estas personas (por ejemplo, evaluar a las personas y las situaciones, encontrar acuerdos). La utilización de este marco era un reto teórico y metodológico científicamente estimulante, alejado una vez más de una forma estrictamente definida de investigación aplicada y de gestión. Al final, no me basé en el modelo de Boltanski y Thévenot. Las primeras observaciones empíricas pronto

revelaron lo difícil que era aplicarlo a los contextos en cuestión. Sin entrar en demasiados detalles, me limitaré a observar que, contrariamente a un elemento fundamental de este modelo de análisis, no se referían a situaciones “públicas”. En estas interacciones a puerta cerrada, las preguntas críticas de los usuarios eran poco frecuentes y no daban lugar a muchas justificaciones por parte de los funcionarios. Se puede rastrear algo que es más correcto llamar tensiones, y no disputas. Describir sus modos de regulación relacionándolos con la “ciudad doméstica”, “cívica” o “de mercado”, por retomar las nociones de Boltanski y Thévenot, corría el riesgo de convertirse en un ejercicio de estilo que habría reflejado más la conceptualización de esas nociones que la realidad observada. Mi contacto en el departamento de investigación de la organización asistencial me dejó libertad para seguir mis líneas de investigación, siempre y cuando proporcionara información detallada sobre lo que ocurría y lo que estaba en juego durante las interacciones burocráticas (estos encuentros aparentemente triviales seguían siendo bastante enigmáticos para el personal directivo). Al final, la vaguedad de la pregunta del cliente me permitió interpretarla y redefinirla a mi manera y hacer elecciones teóricas y metodológicas precisas. De forma bastante inesperada, lo que podría haber sido un estudio de caso de gestión pública de escaso interés desde el punto de vista de las ciencias sociales académicas se convirtió en un proyecto de investigación que pude encuadrar libremente a mi antojo y que me brindó la oportunidad de realizar mi primer intento como etnógrafo de la política y plantear cuestiones teóricas que nada tenían que ver con la mejora de la satisfacción del usuario o la implementación de la modernización de la gestión de los servicios públicos.

Esto me permitió realizar una auténtica investigación etnográfica. Pasé seis meses en dos ventanillas sociales, observando a los usuarios en la sala de espera y hablando con ellos, sentándome en el escritorio junto a los asistentes sociales durante sus reuniones con ciudadanos pobres y realizando entrevistas en profundidad sobre su trabajo, sus historias personales y sus actitudes. Estas agencias, las *Caisses d'Allocations Familiales (CAF)*, fueron especialmente interesantes de observar. Como su nombre indica, las CAF estaban inicialmente destinadas a prestar asistencia a las familias (independientemente de sus ingresos). En aquella época, se estaban convirtiendo en instituciones muy importantes en el ámbito de la asistencia a los ciudadanos desfavorecidos; eran responsables en particular de la gestión de las principales prestaciones sociales mínimas, en particular, en aquel momento, el *revenu minimum d'insertion (RMI - ingreso mínimo de inserción)*. Basado en un enfoque empírico-descriptivo, este trabajo de campo arrojó resultados que contradicen las nociones predominantes y preconcebidas de un “encuentro burocrático” transmitidas por el discurso institucional oficial. Demostré, por ejemplo, que las funciones reales de estos encuentros cotidianos eran mucho más complejas y diversas de lo que sugería su definición oficial implícita. Lo que la dirección consideraba visitas innecesarias, que provocaban largas colas en detrimento de la tramitación eficaz de personas y papeleo, parecía estar motivado por la ansiedad social, por la necesidad de las personas aisladas de hablar con alguien y recibir asesoramiento sobre muchos aspectos de la vida, lejos de los meros requisitos burocráticos. Del mismo modo, mientras que el discurso dominante atribuía la degradación de estas relaciones a la creciente “incivilidad” de los usuarios, yo demostré que el

problema no residía tanto en su “agresividad” como en la violencia social a la que estaban sometidos (pobreza, desempleo, desesperación); las burocracias asistenciales a nivel de calle se convirtieron en el lugar donde podían expresar su ira contra “el sistema social”, que estas instituciones encarnaban. Aunque el trabajo de los funcionarios se consideraba en la mayoría de los casos intrascendente y rutinario, revelé las inesperadas dificultades y la complejidad de su función social, desde la asistencia compasiva hasta el control policial, desde la actitud burocrática fría y anónima hasta la implicación individual, desde la eficacia técnica hasta el asesoramiento y el apoyo personalizados. Por último, aunque las “habilidades de comunicación” y el “carácter individual” se consideraron las dos variables del trabajo de recepción, identifiqué tanto las causas estructurales de los problemas como la variedad de factores que entraban en juego, como el origen social, la experiencia laboral, el origen étnico, el género, la generación, las particularidades organizativas locales y las características de los clientes.

Como no tenía ningún motivo especial para complacer a las autoridades administrativas con un informe que respondiera a sus (vagas) expectativas, pude presentar estos resultados sin rodeos y conceptualizarlos en mi lenguaje científico sin temor a posibles reacciones negativas por parte de quienes habían encargado el estudio; a diferencia de ellos, pude afirmar, como hacen los etnógrafos, que “yo estaba allí”, por retomar la expresión de Clifford Geertz (1989). Y lo que es más importante, me esforcé por presentar una demostración sistemática que no pudiera reducirse a los sentimientos o preferencias personales de un joven académico.

### **Una investigación etnográfica y sus públicos**

La cuestión que me gustaría abordar ahora es precisamente la que tiene que ver con la recepción de esta investigación. Esto me permitirá mostrar cómo la etnografía política puede llegar a ser pública, cuáles pueden ser sus diversos públicos y cómo, a su vez, la recepción de la investigación puede repercutir en la autonomía de un académico en su trabajo posterior.

Al principio, presenté mi investigación en un informe de 150 páginas a la agencia de trabajo social que estaba explorando (y, en parte, para la que trabajaba). No pasó gran cosa durante esta primera recepción oficial. Mis compañeros del departamento de investigación del organismo de asistencia social se mostraron muy satisfechos con mi trabajo. Los responsables de esta agencia mostraron un cortés interés pero no se mostraron entusiasmados, por no decir otra cosa, con una investigación que insistía en la dominación y las relaciones de micropoder, cuando los problemas se enmarcaban oficialmente en términos de “coproducción”, “negociación”, “buena comunicación” y “relaciones de servicio”. Incluso en las oficinas locales donde realicé mi trabajo de campo, la investigación no contó con una aprobación unánime, especialmente en un caso que yo había descrito como un modelo “burocrático” de recepción de clientes, contraponiéndolo a un modelo de “trabajo social”. Nuestro encuentro se centró principalmente en explicar mi uso del término “burocrático”, en referencia a Max Weber, sin la connotación negativa que conlleva en el lenguaje común. No logré convencer a mis interlocutores y este desafortunado adjetivo les impidió escuchar lo que mi investigación podría aportar a su reflexión. Obtuve mejores comentarios de los funcionarios con los que había

interactuado; aunque mi estudio a veces ponía de relieve aspectos negativos de sus actitudes y comportamientos, estaban contentos de que se reconociera que su trabajo era complejo y útil para la investigación académica. Algunos de ellos me dieron las gracias y expresaron su deseo de que mis conclusiones sobre sus condiciones de trabajo llamara la atención de sus superiores. Si esto ocurrió, fue de forma retardada e indirecta. El contacto que mantuve con los funcionarios una vez finalizado mi trabajo de campo fue, por desgracia, solo indirecto. No fueron invitados a las reuniones en las que presenté mi investigación y solo pudieron reaccionar enviándome una carta tras leer mi informe. Desgraciadamente, y esto dice mucho de cómo los organismos de asistencia social concebían sus relaciones con el público en aquella época, no se organizaron reuniones con los usuarios y, en consecuencia, no pude mantener ninguna conversación con ellos sobre mi investigación.

Tres años más tarde, este estudio se publicó como libro en una nueva serie de ciencia política de una editorial académica de segunda categoría, que tiene principalmente libros de texto de derecho y economía en su catálogo (Dubois, 1999). Me invitaron a presentarlo en varias conferencias organizadas por organizaciones benéficas, como ATD Quart Monde, influyente en el ámbito de la filantropía francesa. El libro recibió una cobertura mediática inesperada, con una docena de reseñas o entrevistas en la prensa y algunas apariciones en televisión y radio. Fue mucho más de lo que yo podía esperar como joven académico desconocido que vivía lejos de París, sin conexión con periodistas y que trabajaba en un departamento universitario que, en aquel momento, no tenía contacto regular con la

prensa nacional. La atención de los medios de comunicación se debió principalmente a las noticias sobre agresiones a funcionarios por parte de usuarios de los servicios públicos que habían tenido lugar durante el mismo período y que habían suscitado debates públicos sobre los encuentros burocráticos. Una vez desacreditado el tema oficial de la “modernización de los servicios públicos”, se me brindó la oportunidad de explicar por qué el encuadre mediático de los “sucesos violentos de primera línea en los servicios públicos” en términos de “incivilidad” y “comportamiento antisocial” debería al menos examinarse desde la perspectiva más amplia de las diversas formas de violencia implicadas, incluida la violencia social y simbólica de la que eran víctimas los beneficiarios de la asistencia social.

### Extracto

Béville, 23 de marzo de 1995, primera hora de la tarde. Una mujer, cuya vestimenta y actitud denotan una situación difícil, llega al CAF para preguntar por el subsidio de ayuda familiar (ASF) para sus hijos. La recibe Frédérique Rouet, recepcionista de la oficina. Está separada de su marido, cuyo RMI (Ingreso Mínimo de Inserción) ha sido suspendido por “incumplimiento del contrato de inserción”, y no sabe dónde vive. Solo sabe que vive solo en un bloque de pisos. De sus cinco hijos, cuatro estaban a su cargo; acaba de “recuperar” a dos de ellos.

La carta administrativa que lleva consigo está sucia y estropeada, pero de todos modos ha pensado en llevar la carta del juez relativa a la custodia de los hijos. Parece visiblemente preocupada, pero sus respuestas son claras y firmes. Se encuentra en una situación familiar y social muy difícil, pero la señora mantiene la sonrisa. Aparentemente familiarizada con las normas y el vocabulario administrativo, muestra respeto por las normas (“Si me mudo, tengo que decírselo, ¿no?”) y solo utiliza el término “concubina” cuando tiene que

referirse a la persona con la que vivía antes. Su buena voluntad administrativa se suma a la social: habla de su deseo de “salir” y abandonar el barrio en el que vive, que “no es el mejor”.

Por su parte, Frédérique Rouet, tras consultar la pantalla, deduce racionalmente que se trata de un problema de codificación administrativa: ¿existe o no un ‘mantenimiento del vínculo afectivo’? El hijo está clasificado como ‘mantenimiento del vínculo afectivo’, pero no la hija: “Es extraño, ella no está clasificada así”. La beneficiaria menciona entonces el hecho de que compra regularmente ropa y zapatos para los dos; Frédérique Rouet no ve esa información y dice que la hija está quizás “mal codificada”. Reduciendo el problema a una cuestión de gestión administrativa del expediente, se atiene a las normas y a los cuestionarios completados, y finalmente se refiere a la posibilidad de una ausencia de “mantenimiento de los vínculos afectivos”. Una investigación lo determinará. Antes de iniciar la investigación, por precaución, Frédérique Rouet va a buscar los documentos que podrían explicar la diferencia en la gestión de los dos niños. Tras una ausencia de unos minutos, regresa sin haberlos encontrado.

Las dos tienen entonces que presentar una solicitud para el ASF; sin discusión, pero basándose únicamente en una observación visual de la actitud general de la beneficiaria, Frédérique Rouet decide rellenar el formulario por ella. Entre tanto, ha transcurrido una media hora; la beneficiaria se marcha, todavía sonriente, dando las gracias al agente que la ha recibido. Este último me señala que la mayoría de los beneficiarios del RMI han “despertado”: en general, llevan los documentos requeridos sin demasiadas dificultades y responden adecuadamente a las preguntas que se les hacen. Aunque más larga que la media y con un nivel de dificultad técnica superior al habitual, esta interacción no fue tan diferente de muchas otras. El tipo de relación con la institución que se manifiesta aquí, aunque evidentemente no es el único posible, es sin embargo particularmente frecuente entre los agentes de las categorías más desfavorecidas, que en su gran mayoría trabajan en las ventanillas de las Cajas de Subsidios Familiares. [...] Vemos en primer lugar, de forma muy concreta, cómo el desarrollo de la identificación burocrática de los individuos, ligado al crecimiento del número de procedimientos de ayuda social, ha contribuido a redefinir las relaciones entre

“vida privada” y “vida pública”: es en primer lugar lo que concierne a la esfera más íntima (por ejemplo, el vínculo entre una madre y sus hijos) lo que registran, codifican y cuestionan los agentes de la agencia pública. Entonces comprendemos cómo el agente receptor puede verse “naturalmente” impulsado a traducir un problema que se presentaba como “personal” en un problema de gestión administrativa. Ya no se trata entonces de saber si la clasificación del “mantenimiento de los vínculos afectivos” —que forma parte del cálculo de las indemnizaciones a distribuir— se ha realizado correctamente, sino de determinar su conformidad con las normas que subyacen a la construcción administrativa de tal situación. Esta interacción también se basa en el hecho de que estas normas pueden ser efectivamente interiorizadas por aquellos a quienes se aplican en la medida en que no solo son aceptadas, sino que también proporcionan los patrones de percepción a través de los cuales los individuos imaginan su situación. Esta interacción puede tener una importancia y un significado diferentes en función de la posición social ocupada y de las experiencias previas. En este caso concreto, es evidente que ella lleva mucho tiempo acostumbrada a la intervención de trabajadores sociales y agentes administrativos en su vida personal y familiar; se ha “despertado”, como dice Frédérique Rouet. Además, el estado de sus recursos —sociales, financieros y culturales— no le permite ni la deserción (salida) ni el discurso crítico (voz), por retomar las categorías propuestas por Albert Hirschmann. La historia personal, las disposiciones y la situación actual se combinan para hacerla aceptar un tipo de trato que una persona en mejor posición podría haber considerado ilegítimo.

En última instancia, los mecanismos de desposesión pueden observarse en toda su complejidad en este episodio. Obligada a dejar que otros —en este caso el juez— decidan por ella y sus hijos, pierde el control sobre su propia vida. Y sus intentos de intervenir en el curso de la interacción (como cuando presenta el argumento de comprar ropa para sus hijos) acaban resultando un fracaso: el agente, en esta fase de la tramitación del expediente, no lo tiene en cuenta. Además, estos intentos no consiguen escapar a la lógica burocrática oponiéndose a la alternativa concreta de la experiencia individual: si esta persona recurre al argumento de la compra de ropa, es porque se trata de uno de los criterios administrativos utilizados para evaluar el “mante-

nimiento de los vínculos afectivos”. Vemos también cómo el gesto —al mismo tiempo altruista y fundado en una racionalidad burocrática— del agente que rellena el cuestionario en lugar del beneficiario inserta en la práctica y en la postura de los cuerpos de manera inseparable tanto lo que se toma como lo que se quita. Y todo esto no deja de tener efectos en la forma en que esta persona construye su propia identidad y posición social, para ella y para los demás: que se sienta obligada a criticar el carácter “malo” del barrio en el que vive —característica conocida por todos y, por tanto, también por el trabajador de recepción— y compensar este signo negativo adicional mediante la referencia a un hipotético traslado basta para demostrar que es en el respeto de las normas sociales —a través y más allá de las normas específicas de la institución— donde se juega el encuentro administrativo.

La gestión e identificación burocrática de los individuos, la ‘aculturación’ y los mecanismos sociales diferenciados de interiorización de las identidades burocráticas: estos son los procesos que [intento] describir [...]. Frente a segmentos de la población cada vez más alejados de las normas sociales e institucionales, los dispositivos de encuentro burocrático y de reproducción de una relación desigual tienden, para bien o para mal, a transformar a individuos concretos en “beneficiarios”, es decir, a conformarlos a los papeles institucionalmente prescritos, y a inculcarles comportamientos, prácticas y estatus. Estos mecanismos sirven ante todo para mantener el orden de la relación administrativa, pero tienen implicaciones que van mucho más allá de las meras interacciones en ventanilla (Dubois, 2020).

El libro, del que se ofrece un extracto más arriba, recibió incluso más atención en los círculos académicos de la que yo hubiera podido esperar. Fue premiado por la Académie des Sciences Morales et Politiques, recibió numerosas críticas positivas en muchas revistas francesas de ciencias sociales (de nuevo, mucho más allá de mis expectativas) y pareció interesar a un amplio abanico de académicos con distintos intereses. A los interesados en el trabajo social y la asistencia social les resultó útil para comprender los aspectos burocráticos

de estos ámbitos. Los politólogos y los analistas de políticas públicas acogieron con satisfacción la contribución del libro a la sociología política de las instituciones y al enfoque de la burocracia a nivel de calle inspirado en Lipsky (1980)<sup>6</sup>, que por aquel entonces estaba floreciendo en Francia. La recepción de la investigación también se benefició del creciente interés por los métodos etnográficos y mi estudio se utilizó a menudo en cursos de metodología para ejemplificar cómo realizar trabajo de campo. Además, el marco teórico del libro, que combina un enfoque estructural inspirado en Bourdieu con un enfoque de las interacciones estratégicas cara a cara desde una perspectiva goffmaniana, atrajo la atención de académicos de diversos campos.

Mi estrategia de redacción contribuyó sin duda a captar esta atención, tanto dentro como fuera de los círculos académicos. Esta estrategia se inspiraba en la atención de Goffman al detalle y a las situaciones concretas al servicio de las afirmaciones teóricas. En lugar de avanzar consideraciones abstractas y largas discusiones de la literatura seguidas de viñetas empíricas, organicé el libro en términos de una demostración paso a paso, basada simultáneamente en afirmaciones sociológicas y descripciones etnográficas. El cuidado en el estilo de escritura tenía como objetivo ilustrar el punto que quería plantear: los encuentros burocráticos no pueden reducirse a un intercambio instrumental, funcional y rutinario, sino que son situaciones que implican diversos aspectos importantes de la vida de los usuarios y, por tanto, implican cuestiones estratégicas, tácticas, valores y emociones. Consideraré estos encuentros un ejemplo de relación individual con las instituciones, que resuena con los intereses y experiencias personales de los lectores en otros contextos.

El libro se vendió bastante bien para los estándares franceses (unos 4.000 ejemplares, mientras que la mayoría de los libros de ciencias sociales suelen vender 450 ejemplares), especialmente para un volumen basado en el trabajo de campo y publicado por una editorial de segunda categoría. La editorial original publicó tres ediciones sucesivas (en 1999, 2003 y 2010); luego vino una traducción al inglés (2010); una gran editorial (Points-Seuil) publicó entonces una nueva edición de bolsillo (2015), seguida de una traducción al italiano y al español (2018), al español para Latinoamérica (2020) y portugués (2023).

Solo después de que el libro recibiera cobertura mediática y atención académica, las agencias públicas, incluida la que había encargado originalmente la investigación, mostraron verdadero interés por ella. En resumen, la investigación fue inicialmente encargada por la institución, pero luego transformada a propósito en una investigación académica crítica; fue bien recibida por los académicos y, en menor medida, por el público; como resultado de estas críticas favorables más que de su contenido (o quizás debería decir a pesar de su contenido), la obra acabó atrayendo cierto interés por parte de la agencia que me había encargado el estudio, pero que había permanecido poco convencida de mis conclusiones. En la actualidad, el libro es leído o, al menos, conocido por los responsables de la asistencia social. Se utiliza como referencia en la formación de los burócratas en contacto con los usuarios y, en particular, para llamar su atención sobre las complejidades sociales de las interacciones aparentemente mundanas en las oficinas de asistencia social. Sin embargo, su contenido y estilo apenas difieren del informe original, que fue ampliamente ignorado. Esta circulación

más bien errática sirve de ejemplo paradigmático de cómo la propia investigación etnográfica de las políticas puede traspasar las fronteras entre el conocimiento profesional, la crítica y la política pública, por retomar la tipología de Burawoy. Lo que podría haber sido una investigación de apoyo a la política pública, con una orientación crítica y académica, se convirtió en un trabajo de sociología pública. Y fue entonces, pero solo entonces, cuando fue utilizado por la agencia pública.

### **Cuando el reconocimiento permite estrategias arriesgadas**

El reconocimiento de mi trabajo por parte de diversos públicos interconectados me permitió proponer un nuevo proyecto de investigación a la misma institución en 2000, un año después de la publicación del libro. Así comenzó la segunda experiencia de la que hablaré a continuación. Esta vez el tema era de mi elección y resultaba más controvertido. Mi intención era estudiar el fraude a la asistencia social, no analizar comportamientos desviados, sino investigar las prácticas institucionales de vigilancia de los ciudadanos pobres. En aquella época, estas prácticas de control se consideraban el lado oscuro de la administración de la asistencia social y nadie quería hablar de ello. El fraude a la asistencia social no era todavía el tema controvertido que los medios de comunicación estadounidenses y británicos y los debates políticos de esos países ya habían suscitado, ni en lo que se convertiría más tarde en Francia, especialmente bajo el mandato de Sarkozy (2007-2012). Lejos de informar al público sobre cómo castigaban a los “pobres que no lo merecían”, como harían más tarde, los organismos de asistencia social guardaban

silencio sobre estas cuestiones, que estaban mucho menos presentes que hoy.

Habría sido inconcebible para mí hacer semejante propuesta sin el beneficio de mi experiencia previa. Sin embargo, la búsqueda fue mucho más difícil. Me llevó un año y medio de largas y complejas negociaciones, en las que se acumularon obstáculos legales y burocráticos debido, sobre todo, a un conflicto interno en la agencia nacional de asistencia social entre partidarios y detractores de mi proyecto. Por razones poco claras, el nuevo director, aparentemente contrario al proyecto, canceló el contrato de investigación que acabábamos de firmar. La historia podría haber acabado ahí, pero me negué a ceder y recibí apoyo interno. Tras otro año de negociaciones, por fin pude llevar a cabo la investigación según lo planeado. Sin embargo, el trabajo de campo no fue nada fácil. A nivel local, algunos directivos se mostraban reacios a permitirnos a mí y a mis compañeros acceder a “su” personal para realizar entrevistas u observaciones. En un caso, los obstáculos fueron tan desalentadores que decidí trasladarme a otro lugar. Unas semanas más tarde, me sorprendió ver un documental de televisión sobre investigaciones de fraude en esa misma oficina de asistencia social. Evidentemente, mis interlocutores consideraban aliados a los periodistas, pero no a los científicos sociales. También conocí a algunos investigadores de asistencia social bastante poco entusiastas, que no querían que un observador externo, a menudo sospechoso de haber recibido un encargo de sus superiores para evaluar su trabajo, les molestara en su rutina personal. En aquella época, estos inspectores habían creado recientemente un sindicato y se estaban organizando (sin éxito)

para mejorar su estatus y su salario. A pesar de estas dificultades, pude realizar mi propio trabajo de campo, que dio lugar a un informe presentado al mandante en 2003.

Sabía que se trataba de un tema delicado, pero, como antes, decidí no suavizar la presentación de mis resultados en previsión de las reacciones de mis socios institucionales, aunque no esperaba que mis conclusiones les resultaran muy agradables. Estos resultados desencajaron por completo el discurso oficial sobre el rigor jurídico y pusieron de manifiesto la vaguedad de las normas que debían aplicarse, la incoherencia de las prácticas burocráticas y la arbitrariedad de las decisiones (Dubois, 2014b). Demostré cómo la emergente política de supervisión y sanción de la asistencia social, que algunos promovían como una forma de aplicar las normas de forma más estricta, se basaba en realidad en lo que denominé un “bricolaje jurídico” por parte de los investigadores de la asistencia social, que a su vez no se atenían estrictamente a las normas: en la toma de sus decisiones intervenían tanto los estereotipos sociales personales como las normas oficiales.

Era consciente de que ésta podría haber sido mi última colaboración con la organización. Sin embargo, conseguí que aceptaran estas afirmaciones haciendo un relato muy detallado en un informe más largo y profundo de lo que estaban acostumbrados. Aunque no estuvieran muy satisfechos con mis conclusiones, no podían decir que me equivocaba o que estaba mal informado, ni siquiera en aspectos técnicos. En otras palabras, para legitimar mi enfoque crítico tuve que hacer gala de un conocimiento experto de las normas, las prácticas y los mecanismos institucionales.

Decidí no publicar mis resultados inmediatamente para aliviar posibles tensiones y complementar esta investigación con otros trabajos. Mi plan era, en primer lugar, publicar algunos artículos académicos serios (cosa que hice), luego publicar un libro, que podría atraer la atención de un público más amplio (Dubois, 2021) y, por último, difundir mis resultados como forma de intervenir en el debate público (Vivès et al., 2023). Debido a otros proyectos en curso y a diversos compromisos académicos, no he podido llevar a cabo lo planificado en el plazo inicialmente previsto. En consecuencia, ha sido necesario actualizar mis datos, sobre todo porque se han producido cambios radicales en el ámbito de la supervisión y las sanciones de la asistencia social desde que realicé la primera investigación.

### **Breve presentación de mis investigaciones sobre el control**

Durante las dos últimas décadas, tanto en Francia como en el resto de Europa, la cuestión del fraude a la seguridad social y el desarrollo de verdaderas políticas de control han suscitado una inversión más intensa que en ningún otro momento desde la instauración de los sistemas de protección social de la posguerra. El objetivo de este libro es dar cuenta de las razones, métodos y efectos de esta evolución. Siguiendo una estructura descendente, el libro comienza situando estos desarrollos dentro de las transformaciones globales de las políticas sociales, mostrando la construcción política y periodística del fraude como problema público y el modo en que las transformaciones internas dentro del ámbito burocrático lo traducen en objeto de intervención. A continuación, muestra cómo el control se constituye como política institucional en las administraciones sociales, dotada de medios e instrumentos renovados y reforzados (sistemas algorítmicos y de información), y cómo esta política se traduce localmente en la práctica, en particular mediante la realización de controles domiciliarios. Concluye con un acercamiento

a los segmentos más vulnerables de la población, con un estudio de lo que los controles hacen a quienes se ven sometidos a ellos. El análisis se basa en una amplia gama de estudios, entre ellos una serie de investigaciones etnográficas que consistieron esencialmente en seguir a los inspectores durante sus visitas a domicilio, lo que nos permitió relatar la confrontación directa entre los beneficiarios sospechosos de abusos y la administración. Esta etnografía muestra en particular el “bricolaje jurídico” que, al menos en una época, debería haber garantizado el rigor de la aplicación de la ley (Dubois, 2021).

Por lo tanto, y este será mi tercer y último ejemplo, volví a ponerme en contacto con mis socios institucionales, en 2012, proponiéndoles actualizar mi investigación anterior. Esta vez, manifestaron un interés inmediato y entusiasta. Me dieron información valiosa sobre cómo proceder, pidiéndome que enviara mi propuesta justo a tiempo para beneficiarme de los fondos aún disponibles en su presupuesto. Aunque tuve que pasar por el proceso formal de revisión, ya sabía que mi proyecto sería aceptado antes de enviarlo (siempre que fuera serio, claro). En los cinco años anteriores, el fraude en la asistencia social se había convertido en un tema importante y los organismos de asistencia estaban más dispuestos a mostrar sus resultados en este ámbito que cuando había realizado mi anterior trabajo de campo. Pero creo que la principal razón por la que mis contactos me brindaron un apoyo inesperado radica en la recepción de aquel primer libro, casi quince años después de su publicación inicial. Durante nuestro primer encuentro, para mi sorpresa, me hablaron del libro: “Es nuestra Biblia”. Dada la recepción de mi investigación original, yo estaba completamente desprevenido y desconocía la importancia del libro, pero me sirvió de mucho.

Me proporcionó legitimidad tanto académica como institucional, lo que me ayudó a conseguir que se aceptara mi propuesta, acceder a personas y documentos confidenciales, obtener ayuda para la recopilación de datos, etc. A pesar del carácter tan delicado del tema del fraude y la vigilancia de la asistencia social, que se debatía y se debate a menudo en los medios de comunicación y en el ámbito político, nunca había recibido un apoyo tan entusiasta como el que disfruté en esta investigación. Por supuesto, había que tomar ciertas precauciones. En algunas ocasiones recibí solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación y una vez de uno de los principales sindicatos franceses para un artículo en su boletín. Antes de aceptarlas, me aseguré de informar a mis socios institucionales y obtener su consentimiento formal, para preservar nuestra relación contractual. También me aseguré de evitar respuestas abiertamente polémicas y de prevenir reacciones negativas que pudieran repercutir en la continuación de mi investigación.

Nunca se es demasiado prudente en tales situaciones. Por ejemplo, me invitaron a hablar sobre la “vigilancia” de los pobres y los desempleados en un foro social organizado en una pequeña ciudad por organizaciones alternativas y activistas. Había unas veinte personas entre el público, el ambiente era animado y cálido y sentí que podía hablar libremente, y así lo hice. No sabía que entre las veinte personas presentes había una periodista. No me dirigió la palabra, pero más tarde publicó una reseña de mi intervención en el periódico local, afirmando

que había “escandalizado” al público cuando expliqué lo invasivas que pueden ser las encuestas sobre bienestar. Este relato periodístico de mi modesta experiencia como etnógrafo político, revelando a los activistas algunos aspectos ocultos de las políticas actuales, podría haber sido el final de mi acceso al servicio local donde estaba realizando el trabajo de campo. Resultó que tuve la suerte de que ni una sola persona del servicio “leyó lo que el periódico escribió que yo dije” (parafraseando a Greenberg, 1993).

Esta desventura demuestra que hay un momento en que la etnografía se hace pública, aquí en el sentido de difusión de los resultados de la investigación en redes de activistas. Dirigirse a un público de políticos, activistas políticos radicales o al público en general es una cuestión de tiempo y no una opción permanente. Esto es lo que ocurrió tras la publicación de mi libro sobre el seguimiento de los beneficiarios de prestaciones sociales en 2021. Paradójicamente, la información precisa y a veces técnica que contenía, en lugar de repeler a los lectores no académicos, despertó un interés considerable entre periodistas, organizaciones benéficas y activistas porque se presentaba en un marco analítico crítico que permitía traducirla a los términos del debate público. La necesaria colaboración con los organismos políticos obliga a aplazar algunas reuniones para evitar conflictos que puedan poner en peligro la capacidad de llevar a cabo el trabajo de campo. Esta prudencia no equivale a una autocensura; es ante todo pragmática y temporal.

## Conclusiones

Habiendo comenzado este capítulo con la convocatoria de Burawoy a la sociología pública, me gustaría volver a él en esta conclusión. En su introducción a un número especial sobre “Compromisos precarios en el ámbito de la sociología pública” publicado en *Current Sociology*, Burawoy usa la frase de Bourdieu y su concepto de campo para describir la sociología como un “deporte de combate” y para considerar las dificultades de la sociología para volverse “pública” al situarse en la intersección de los campos académico y político (Burawoy, 2014). Burawoy elabora útilmente la noción de “deporte de combate” aplicada a la sociología distinguiendo tres formas de lucha en las que los sociólogos deben participar: la lucha contra el sentido común, la lucha con los “doxósofos” (como periodistas, expertos y políticos), que desean imponer su visión social del mundo como la única relevante y legítima, y la competencia dentro del campo académico con otras disciplinas (como la filosofía o la economía) y dentro de la propia disciplina sociológica. Sin embargo, pasa por alto un punto importante: la analogía de Bourdieu no se refiere a cualquier deporte de combate, sino específicamente a las artes marciales. Conviene subrayarlo porque la referencia a las artes marciales nos invita a pensar en una forma de combate en la que se manipula la fuerza del adversario contra él en lugar de enfrentarse a él con la propia fuerza (*jitsu*). Los “oponentes” son quienes ejercen el poder social, político, económico y simbólico: gobiernos, líderes políticos, medios de comunicación dominantes, instituciones financieras y otros. Los sociólogos y, por extensión, los científicos sociales nunca pueden enfrentarse directamente a ellos. En cambio, pueden utilizar los recursos acumulados de los poderosos (infor-

mación, finanzas, oportunidades de difusión) para llevar a cabo una investigación crítica que cuestione los puntos de vista dominantes e intervenir en el debate público sobre esta base.

En este sentido, la etnografía política puede definirse como un deporte de combate y, más concretamente, como un arte marcial. Consiste en utilizar los recursos informativos, financieros o simbólicos que proporcionan las instituciones políticas para construir una comprensión crítica de dichas instituciones y de las políticas que aplican. No hay más remedio que jugar simultánea o sucesivamente a distintos niveles (organizaciones públicas, universidades, medios de comunicación) y dirigirse a distintos públicos (decisores públicos, académicos, periodistas, activistas, público en general) para combinar un estudio de la burocracia desde dentro con un enfoque crítico y, a partir de ahí, proponer análisis destinados a alcanzar relevancia tanto académica como pública.

En mi opinión, esta combinación es necesaria para que la etnografía de las políticas públicas reivindique su relevancia. Ofrecer una perspectiva desde dentro sin un horizonte crítico equivaldría a reducir la etnografía de las políticas públicas a un conocimiento experto instrumental. A la inversa, hacer afirmaciones críticas sin un conocimiento detallado desde dentro conllevaría el riesgo de simplificar en exceso y no hacer más que predicar al coro. En mi caso, criticar la coerción y la vigilancia de los pobres por motivos morales y políticos solo puede convencer a quienes comparten estas preferencias morales y políticas. Desde mi perspectiva, el objetivo de la etnografía política es revelar cómo funcionan realmente la coerción y la vigilancia, sus fundamentos y su impacto en las personas. Más allá de su contri-

bución al conocimiento académico, podemos esperar que este tipo de clarificación ayude a confrontar a los formuladores de políticas

con las contradicciones de sus políticas y a cuestionar las ideas comúnmente aceptadas sobre estas cuestiones.

## Notas

<sup>1</sup> Este artículo es una traducción revisada de "Policy ethnography as a combat sport: Analyzing the welfare state against the grain", que apareció en D. Fassin (Ed.), *If truth be told: The politics of public ethnography*, Durham, Duke University Press, 2017, pp. 184-202, y se publica aquí con permiso del titular de los derechos de autor, Duke University Press. Me gustaría dar las gracias a Jonathan Benthall y Didier Fassin por sus comentarios sobre la primera versión de este texto, a los lectores anónimos de esta revista y a Diego Valdivieso por el minucioso cuidado con que llevó a cabo esta traducción al español.

<sup>2</sup> Para no sobrecargar el texto, en lo sucesivo utilizaré los términos etnografía y sociología para referirme a las cuestiones que tienen en

común. Volveré a hacer una distinción más específica entre ambas perspectivas cuando sea necesario.

<sup>3</sup> Véase, por ejemplo, mi artículo sobre Bourdieu como consultor político (Dubois, 2011).

<sup>4</sup> La primera colección de este tipo fue Liber, Raisons d'Agir (Liber, razones para actuar), lanzada por Bourdieu con su panfleto *Sobre la televisión* (2006).

<sup>5</sup> Véase, por ejemplo, la colección *La République des Idées*, lanzada por el historiador y sociólogo Pierre Rosanvallon en 2002 y publicada por Seuil.

<sup>6</sup> Para la discusión en español ver Laguna et al., 2018.

## Referencias bibliográficas

Balbi, F. A. & Boivin, M. (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. *Cuadernos de Antropología Social*, 27, 07-17.

Beaud, S. & Weber, F. (2014). *Guía para a pesquisa de campo: Produzir e analisar dados etnográficos* (2ª ed.). Petrópolis: Vozes.

Bezès, Ph., Chauvière, M., Chevallier, J., Montricher, N. & Ocqueteau, F. (Eds.) (2005). *L'État à l'épreuve des sciences sociales: La fonction recherche dans les administrations sous la V<sup>e</sup> République*. París: La Découverte.

Boltanski, L. & Thévenot, L. (1991). *De la justification: Les économies de la grandeur*. París: Gallimard.

Bourdieu, P. (2006). *Sobre la televisión*. Barcelona: Anagrama.

\_\_\_\_\_. (2016). *La miseria del mundo*. México: Fondo de Cultura Económica.

Brisebarre, A. M. (1993). The sacrifice of 'Id Al-Kabir: Islam in the French suburbs. *Anthropology Today*, 9(1), 9-12.

Burawoy, M. (2005). Por una sociología pública. *Política y Sociedad*, 42(1), 197-225.

\_\_\_\_\_. (2014). Introduction: Sociology as a combat sport. *Current Sociology*, 62(2), 140-155.

Castel, R. (2000). La sociologie et la réponse à la demande sociale. *Sociologie du Travail*, 42(2), 281-287.

Dubois, V. (1999). *La vie au guichet*. París: Economica.

\_\_\_\_\_. (2011). Cultural capital theory vs. cultural policy beliefs: How Pierre Bourdieu could have become a cultural policy advisor and why he did not. *Poetics*, 39(6), 491-506.

\_\_\_\_\_. (2012). Ethnographier l'action publique: Les transformations de l'État social au prisme de l'enquête de terrain. *Gouvernement et Action Publique*, 1(1), 83-101.

\_\_\_\_\_. (2014a). The economic vulgate of welfare reform: Elements for a socioanthropological critique. *Current Anthropology*, 55(9), 138-146.

\_\_\_\_\_. (2014b). The state, legal rigor and the poor: The daily practice of welfare control. *Social Analysis*, 58(2), 38-55.

\_\_\_\_\_. (2015). Critical policy ethnography. En F. Fischer, D. Torgerson, M. Orsini & A. Durnova (Eds.), *Handbook of critical policy studies* (pp. 462-480). Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.

\_\_\_\_\_. (2020). *Sujetos en la burocracia: Relación administrativa y tratamiento de la pobreza*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.

\_\_\_\_\_. (2021). *Contrôler les assistés*. París: Raisons d'Agir.

Fassin, D. (2013). Why ethnography matters: On anthropology and its publics. *Cultural Anthropology*, 284, 621-646.

Geertz, C. (1989). Estar allí: La antropología y la escena de la escritura. En C. Geertz, *El antropólogo como autor* (pp. 11-34). Buenos Aires: Paidós.

Greenberg, O. (1993). When they read what the papers say we wrote. En C.B. Brettell (Ed.), *When they read what we write* (pp. 107-118). Westport: Bergin and Garvey.

Jeanpierre, L. & Mosbah-Natanson, S. (2008). French sociologists and the public space of the press: Thoughts based on a case study (*Le Monde*, 1995-2002). En C. Fleck, A. Hess & E. Stina Lyon (Eds.),

*Intellectuals and their publics: Perspectives from the social sciences* (pp. 173-191). Farnham: Ashgate.

**Laguna, M. I. D., Cejudo, G. M. & Pardo, M. del C.** (2018). *Las burocracias a nivel de calle: Una antología*. México: Centro de Investigación y Docencia Económica.

**Lemieux, C., Mucchielli, M., Neveu, E. & Van de Velde, C.** (2010). Le sociologue dans le champ médiatique: Diffuser et déformer? *Sociologie*, 2(1), 287-299.

**Lipsky, M.** (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Nueva York: Russell Sage Foundation.

**Mills, C. W.** (2000). *The sociological imagination*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

**Noël, S.** (2012). *L'édition indépendante critique: Engagements politiques et intellectuels*. Lyon: École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques.

**Orsini, M. & Smith, M.** (2011). *Critical policy studies*. Vancouver: University of British Columbia Press.

**Shore, C. & Wright, S.** (1997). *Policy: A new field of anthropology*.

En C. Shore & S. Wright (Eds.), *Anthropology of policy: Critical perspectives on governance and power* (pp. 3-39). Londres y Nueva York, Routledge..

**Shore, C., Wright, S. & Però, D.** (Eds.) (2011). *Policy worlds: Anthropology and the analysis of contemporary power*. Nueva York: Berghahn Books.

**Tedlock, B.** (2005). The observation and participation of and the emergence of public ethnography. En N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (pp. 151-171). Thousand Oaks, California: Sage.

**Vivès, C., Sigalo-Santos, L., Pillon, J.-M., Dubois, V. & Clouet, H.** (2023). *Chômeurs, vos papiers! Contrôler les chômeurs pour lutter contre le chômage?* París: Raisons d'Agir.

**Wedel, J. R., Shore, C., Feldman, G. & Lathrop, S.** (2005). Toward an anthropology of public policy. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 600(1), 30-51.